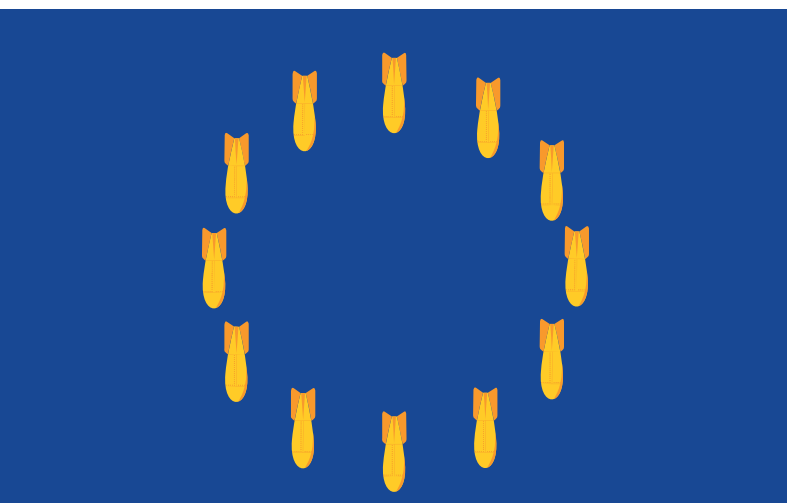


NOVIEMBRE 2024



Palestina, stop genocidio

Al cumplirse un año desde que comenzó la última y enésima escalada de violencia de Israel contra el pueblo palestino, los trabajadores y trabajadoras vascos volvieron a salir a la calle para exigir na vez más el alto el fuego y el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.



Fondos “Next Generation”

Las actuales políticas europeas ni son verdes, ni sociales, ni están orientadas a la paz, se orientan al belicismo y a incrementar el gasto militar al tiempo que se recorta el gasto social. (horiz dagoena sartu ala ez?)



Propuesta política de ELA

La propuesta política de ELA se centra en dos medidas para repartir de un modo más justo la riqueza; lograr la competencia para establecer un salario propio en Hego Euskal Herria y una reforma fiscal que acabe con el fraude, subir los impuestos a quien más tienen y aumentar la recaudación para reforzar los servicios públicos.



STOP GENOCIDIO

ELA se suma a la reivindicación de la Plataforma Gernika-Palestina de un alto el fuego y derecho de autodeterminación.

Al cumplirse un año desde que comenzó la última y enésima escalada de violencia de Israel contra el pueblo palestino, los trabajadores y trabajadoras vascos volvieron a salir a la calle para exigir na vez más el alto el fuego y el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.

Esta guerra total contra el pueblo palestino ha costado la vida a más de 42.000 palestinos y palestinias, la mayoría de ellos menores. La violencia contra la comunidad palestina en Jerusalén y Cisjordania y los crímenes de guerra de Israel están siendo constantes, y el mundo está viendo este genocidio en riguroso directo.

Por todo ello, los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria salieron a la calle el pasado 21 de octubre convocados por la Plataforma "Gernika-Palestina" y por los sindicatos para reclamar:

- Un alto al fuego inmediato y permanente que ponga fin al genocidio en Gaza.
- Una resolución integral por medio de la negociación y diálogo entre las partes bajo el amparo de la comunidad internacional.
- La paralización de la venta de armas a Israel, así como el cese de toda actividad comercial, económica o de cualquier otro tipo con entidades e instituciones que no se opongan al genocidio en Palestina, por parte de las empresas, instituciones locales, estatales y europeas (acuerdos de asociación y tratados de la Unión Europea y los Estados miembro) y entidades como las universidades, organizaciones sociales...
- Que las instituciones de la CAPV y Navarra, así como el Estado español, presenten Declaraciones de Intervención ante la Corte Penal Internacional para apoyar la demanda ya en curso en la misma contra Israel.

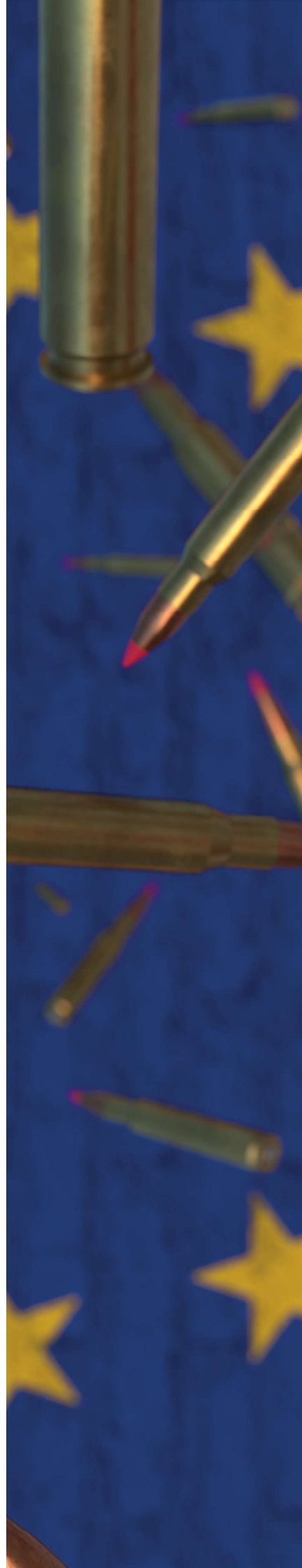


La Unión Europea ariete del regimen de guerra y de la militarización

Así se desprende del informe encargado por ELA a OMAL (Observatorio de las Multinacionales en América Latina) donde se analiza el impacto de los fondos Next Generation que confirma que la UE se ha posicionado como ariete del régimen de guerra y militarización, hasta el punto de que la escalada armamentística se presenta como una salida a la crisis económica.

El informe, titulado ‘UE: agenda verde oliva y digital al servicio de las empresas transnacionales’, recoge detalladamente la relación de empresas receptoras de estos fondos públicos europeos, que lejos de ser unas subvenciones “a fondo perdido que vienen de Europa”, están condicionados a su devolución (en la parte correspondiente a los créditos) y además obligan a los Estados receptores a imponer medidas profundamente antisociales: reformas laborales; recorte de las pensiones; fiscalidad a favor de grandes empresas y fortunas, y límites a la contratación y las políticas públicas. En definitiva, vuelta a las políticas de austeridad, que estarán de nuevo en vigor de forma efectiva desde 2025.

De hecho, recibir los Fondos Europeos obliga al Gobierno español a imponer recortes del 6,1% en las pensiones a partir de abril de 2025 (unos 11.300 millones de euros anuales). Quienes aprobaron la reforma de pensiones trataron de ocultar que estaban imponiendo recortes futuros. La Comisión Europea publicó en abril el Informe sobre Envejecimiento: la reforma de pensiones aprobada en 2023 recogía que, cada 3 años, se revisarían las pensiones para adoptar nuevos ajustes. Los Fondos Europeos son un mecanismo de intervención de las políticas estatales, y se enmarcan dentro de las políticas de austeridad que impone la Unión Europea desde hace mucho tiempo. La responsabilidad es de todos los partidos que posibilitaron la reforma de pensiones, entre los que se encuentran PNV y EH Bildu, que dieron la espalda a la demanda de las organizaciones para rechazar la reforma.



Recortar pensiones para gastar en armas

El belicismo está hoy en el centro de la política, más gasto militar a la vez que se recorta el gasto social. Quieren recortar las pensiones para comprar armas. Esta es la Europa de los Fondos Europeos, una mentira para favorecer los intereses de las grandes multinacionales. **Las actuales políticas europeas ni son verdes, ni sociales, ni están orientadas a la paz.** ELA no quiere esconder lo que sucede, y denunciar lo que está pasando es fundamental para trabajar a favor de otra Europa.

informe elaborado por OMAL revela que los fondos Next Generation van dirigidos, también en Hego Euskal Herria, a las grandes corporaciones multinacionales, con un peso abrumador de la automoción: Volkswagen, Mercedes, Gestamp, Irizar... Los Gobiernos de España, CAPV y Navarra se han volcado en rescatar el sector para salvaguardar sus volúmenes de negocio, obstaculizando de facto la reducción del vehículo privado o el fomento del transporte público. También se analiza el reparto de fondos destinado a otros sectores. Destaca que se destinan ingentes cantidades a engrosar burbujas tecnológicas ('greenwashing') como el hidrógeno (Petronor en Bizkaia, Acciona en Tudela, etcétera) o a enfocar la energía eólica en una lógica neocolonial y extractivista (generalizando la instalación de grandes parques en régimen de monopolio corporativo).

En el sector de la agroindustria, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), con sede en San Adrián, es la principal promotora de la asociación empresarial Spain Food Valley86, que ha presentado un total de 28 proyectos por un valor de 37,3 millones, entre otras. Y en cuanto al agua, Navarra ha recibido 8 millones de euros a través de una iniciativa dirigida por la empresa pública Nilsa y las Mancomunidades de Montejurra y Comarca de Pamplona. Por el contrario, el proyecto estrella en materia acuífera del Gobierno de Navarra –el Canal de Navarra– ha tenido que ser finalmente excluido de optar a fondos NGEU, dada su dilación al menos hasta 2028.

El informe también recoge el detalle de otros sectores (agroindustria, cuidados etc.), y en definitiva concluye que el objetivo de este plan es recuperar la tasa de beneficio para las grandes empresas gracias al dinero público, a costa de de aumentar la precariedad laboral y la conflictividad ecosocial.

Por ello, ELA comparte la conclusión del Informe de OMAL, que considera que este "capitalismo verde oliva y digital" debe combatirse con un rearme teórico y una gran movilización por parte de la izquierda política, social y sindical, al tiempo que se impulsen alternativas factibles, dentro y fuera de las instituciones. La emancipación de los pueblos de Europa pasa por plantar cara sin ambages a la arquitectura de dominación y explotación que representa hoy la UE.





PROPUESTA POLÍTICA DE ELA

Un SMI vasco y una fiscalidad que grave el capital para reforzar los servicios públicos

ELA celebró el pasado 24 de octubre, un multitudinario acto confederal en La Casilla (Bilbo), donde reunió a 4.000 militantes como punto de partida para una campaña de movilizaciones destinada a lograr un reparto justo de la riqueza. Tal y como resumió Mixel Lakuntza (secretario general del sindicato), “la propuesta política de ELA se centra en dos medidas para repartir de un modo más justo la riqueza; por un lado, lograr la competencia para establecer un salario propio en Hego Euskal Herria (que en 2024 sería de 1.795 euros); y por otro, una reforma fiscal para terminar con el fraude, subir los impuestos a quien más tienen y aumentar la recaudación para reforzar los servicios públicos”.

En este sentido, Lakuntza anunció que “ELA va a hacer política, igual que Iberdrola, Petronor o las patronales; pero en la dirección opuesta. Porque creemos en la política, especialmente en la política que no se hace, la que debería ser un instrumento para mejorar las condiciones de vida de la gente. En cambio, la prioridad de la política en las instituciones es no molestar al poder político y empresarial”.

Muy al contrario, Lakuntza concluyó que “el reparto de la riqueza no es algo pacífico; nadie renuncia porque sí a sus privilegios”. Por ello, subrayó que “la propuesta política que ELA trae hoy interpela directamente a los partidos políticos de nuestro país; aquí no cabe la equidistancia, porque si no se apuesta por mejorar los salarios y repartir la riqueza, la desigualdad va a seguir aumentando”.

Repsol y el Lehendakari (Presidente del Gobierno Vasco)

Como ejemplo, citó el caso de Repsol: “Según su consejero delegado, Josu Jon Imaz, tributar un 10% de sus 3.000 millones de beneficios por el impuesto energético pone en riesgo inversiones y miles de empleos; al mismo tiempo, el plan de Imaz para 2024 es repartir 10.000 millones entre sus accionistas. ¿Y esto no es una amenaza para la cohesión y la igualdad social?”. “Lehendakari: menos servilismo ante las grandes empresas y más preocuparse para que paguen al menos un 25% de sus beneficios”.

Asimismo, el secretario general de ELA fue muy crítico con acuerdos políticos como el de la ponencia fiscal de Gipuzkoa (PNV, EH Bildu, PSE): “Dan por bueno lo hecho hasta ahora en fiscalidad, y no se comprometen a ningún cambio para recaudar más y mejorar los servicios públicos: ELA no entiende que partidos de izquierda se empeñen en edulcorar la realidad para ocultar que han decidido no cambiarla”.



También intervino **Leire Gallego** (responsable de Acción Social), que describió la situación de emergencia social: “El precio de los alquileres ha aumentado un 28% desde 2014. Mientras, hay 70.000 viviendas deshabitadas (unas 25.000 en Nafarroa y 50.000 en la CAPV). Estamos seguras de que las grandes movilizaciones por la vivienda también llegarán a Euskal Herria, y ELA llevará sus reivindicaciones a la calle: reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, paralización de los desahucios, movilizar las miles de viviendas deshabitadas, aumentar el parque público y declarar toda la CAPV y Nafarroa como zonas tensionadas”.

Leire Gallego también se preguntó “quién pone en peligro la cohesión y el bienestar social. ¿Las personas migrantes que se juegan la vida por un futuro mejor o las grandes empresas? El fascismo se combate con buenas políticas de vivienda, mejores servicios sociales y servicios públicos de calidad”. Estuvo acompañada por el testimonio de una delegada de ELA en residencias, **Karla Vidal**: “En 2023 hicimos una huelga feminista general para exigir un sistema de cuidados público, universal, gratuito, de calidad y corresponsable, pero los gobernantes siguen aprovechando los cuidados para hacer negocio y privatizarlo, primando el interés de las empresas”.

Aitor Murgia (responsable del Gabinete de Estudios), por su parte, recordó que “el sistema fiscal está diseñado para que las empresas tributen poco o nada. Gracias a las deducciones y a la ingeniería fiscal, las empresas en la CAPV solo pagan de media el 9% sobre sus beneficios, cuando debería ser el 25%. Una vez más, hay que recalcar que el impuesto de sociedades se paga únicamente sobre los beneficios. No sobre facturación. Es decir, que tampoco es para tanto, y en ningún caso afecta a la viabilidad de ninguna empresa”.

Así las cosas, Murgia advirtió de que “estamos a las puertas de una reforma fiscal y las instituciones y los partidos van allanando el terreno para hacerla al servicio de la patronal”. Frente a ello, recordó que “no habrá justicia social sin un sistema fiscal justo y progresivo”.

A **Ane Zelaia** (responsable de Sindicalización) le correspondió presentar la propuesta de SMI que ELA reivindica para Hego Euskal Herria, consistente en un nuevo cálculo (el 65% del PIB per capita de la CAPV y Navarra) que garantice un efectivo reparto de la riqueza entre las rentas de trabajo y de capital, y que no se limite -como hasta ahora- a un mero indicador comparativo entre salarios. “Dicho cálculo supone 1.795 euros mensuales para 2024”, dato que habrá que ir actualizando cada año. “Esta reivindicación es perfectamente alcanzable: en Europa, países con un nivel económico similar al nuestro, tienen SMI más altos: Alemania (1.981 euros), Bélgica (1.955), Países Bajos (1.934) o Francia (1.709)”.

